

¿CHOCARAN POR LO DEL CANAL DE BEAGLE?

Por Jonas WIRTH

LONDRES.— Periodistas londinenses se aprestan a sacar chispas a sus máquinas de escribir. En la primera semana de mayo un tribunal de arbitraje, presidido por un británico e integrado por otros cuatro juristas internacionales, que desde hace muchos meses desfibró las entretelas de un pleito que se remonta a casi cien años, se expedirá a través de un fallo que simbólicamente asumirá como propio la reina Isabel de Inglaterra.

Tres islas tan pequeñas que casi ni se ven en los mapas argentinos o chilenos, llamadas Nueva, Lennox y Picton, que controlan el estratégico canal de Beagle, allí donde termina el mapa de América del Sur y se confunden las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, deberán aparecer con una nacionalidad perfectamente definida y sin posible debate. Pero esto, lo saben los periodistas londinenses, es tan utópico como pretender una solución próxima para el problema cercano de las islas Malvinas.

Existen varios subtemas conexos con las dificultades que se descuentan se producirán. El primero de ellos es que la isla Nueva controla, de hecho, la entrada a la estratégica ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Por muy amistosas que sean las relaciones actuales entre los regímenes de la Argentina y Chile, es difícil imaginar que la Marina de la primera de las naciones indicadas acepte sin más un fallo que, según se adelanta, favorecería a Chile.

Esa Marina, que tiene a su hombre clave como canciller, contralmirante Guzzetti, ya se ha adelantado a advertir que "sería difícil aceptar una decisión que afecte los derechos soberanos en el Atlántico sur argentino", y que la actitud argentina sería "la de tener en cuenta las obligaciones internacionales contraídas por la Nación, en la medida en que no obliguen a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la República o que signifique vulnerar su soberanía sobre zonas que jamás fueron sometidas a la decisión de árbitro alguno".

Esto que parece un galimatías permite entrever que la cancillería argentina sabe que el fallo de los juristas adjudicará las tres islas a Chile. La pregunta que se impone es por qué esa cancillería se avino a aceptar un arbitraje y solo no lo reconocería como válido porque perjudica sus intereses. El pleito se remonta a 1881, pero en 1902 el tratado Roca-Errázuriz (por los respectivos presidentes, argentino y chileno), que según se sostiene impidió el estallido de una guerra, erigió a la soberana británica en árbitro de las diferencias territoriales entre los países litigantes. En 1964 hubo un conato de enfrentamiento entre las fuerzas armadas de Argentina y Chile, a propósito de unos hitos o mojones fronterizos que habían sido corridos —o descorridos— algunos kilómetros en la cordillera de los Andes, en la zona llamada Laguna del Desierto. Murió un gendarme chileno y en Santiago los bustos del prócer argentino Domingo F. Sarmiento fueron arrojados al río Mapocho. Se

exacerbó el patriotismo sin que empero la sangre llegara al río. Los presidentes Eduardo Frei y Arturo Illia confinaron el incidente a sus justos límites, pero hubo un almirante chileno que públicamente se insolentó ante su propio mandatario, por considerarle "flojo" frente al país trasandino.

Lo de Laguna del Desierto, pasó, pero no lo del canal de Beagle, en donde periódicamente se registraban incidentes de naturaleza parecida a aquella. En 1971, los gobiernos de Salvador Allende y Alejandro A. Lanusse decidieron dar cumplimiento a lo prescrito en 1902. De entrada la ventaja la tenía Chile, puesto que el tratado de 1881 afirmaba su derecho a las islas ubicadas al sur del canal, situación que Argentina objetó con el alegato de que si ello era así sus barcos podrían verse imposibilitados de utilizar el canal por una mera decisión unilateral chilena, si Santiago así lo resolvía cuando lo creyera oportuno.

Otro de los subtemas que complican el pleito en su incidencia sobre las reivindicaciones chilenas sobre porciones del continente antártico sobre las cuales la Argentina ejerce soberanía efectiva o al menos es considerado como propio por la nación del Plata. El 15 de enero pasado, en forma totalmente inesperada, el general Pinochet visitó las bases Arturo Prat y la Bernardo de O'Higgins, en las islas Shetland del Sur, y la Presidente Frei, en la península San Martín (que los chilenos llaman O'Higgins). A bordo de la nave Aquiles, a bordo de la cual viajó Pinochet, éste se permitió el sarcasmo de observar que "si alguien se molesta (por el viaje suyo) sería un error, porque sólo he venido a conocer las bases chilenas en tierras chilenas".

Un tercer ítem es la presencia en la zona de yacimientos comprobados de petróleo y gas, combustibles que se añaden por virtualidad propia a la ya fácil ignición de los elementos nacionalistas que se esgrimen por ambas partes. Y un cuarto, y no menos omnipresente, es el de las Malvinas, aunque hasta allí, aparentemente, no llegan las aspiraciones chilenas. Gran Bretaña, para quien las islas que ella llama Falkland desde que se las apropió en 1832 representan alimentar a un elefante blanco, está entrampada entre sus deseos de desligarse de ella y sus menos de dos mil habitantes, y el difuso sentimiento imperial que azuzan kiplynguescamente conservadores y laboristas y dificultan la alternativa de la cesión.

La misión Shackleton, de mediados de 1976, contribuyó a complicar el panorama, al ratificar las presunciones sobre la existencia de grandes yacimientos petrolíferos en la plataforma submarina de las Malvinas. Las perspectivas de su explotación se ensombrecen tanto por las dificultades económicas y financieras que afligen a Albión, cuanto porque toda aventura de extracción de los hidrocarburos se entorpecería frente a una Argentina cercana y hostil, sin cuyo apoyo territorial logístico es impensable la operación permanente y considerable que exigiría la empresa.

Una delegación de periodistas británicos viajó recientemente a la Argentina, con gastos pagados, merced a los buenos oficios de la empresa de publicidad y relaciones públicas neoyorquina —con filiales en Londres y otras capitales— Burson-Narsteller, con la que el gobierno argentino suscribió un contrato por 1,200,000 dólares, dícese que para mejorar su imagen en el exterior. Delegaciones de prensa de Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Suiza ya han viajado o estarían próximas a hacerlo. Por lo que respecta a los británicos, algunos de ellos, además de participar en una reunión con el general Videla, tuvieron ocasión de viajar hasta Ushuaia y las Malvinas. Su largo trayecto hacia el lejano sur les permitió, según crónicas recientes, apreciar por sí mismos el delicado equilibrio que implica la situación que ahora se resolvería, teóricamente al menos, con el laudo de Su Majestad Británica. Previamente, desde Buenos Aires, se ha hecho saber que "resultaría difícil aceptar una decisión del árbitro que afecte los derechos soberanos de Argentina sobre el litoral y las aguas del Atlántico Sur, desde el Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos".